

Una mirada sobre la evolución socioeconómica argentina en la segunda mitad del siglo XX

Berta Sanchez - bertasanchez75@hotmail.com

La conformación de las villas de emergencia en las zonas aledañas a los grandes centros urbanos está íntimamente ligada al proceso socioeconómico que vivió la Argentina en su historia, sobre todo a partir de los años 50 y 60. Durante los años del peronismo, grandes masas poblacionales del interior iniciaron una migración a las grandes ciudades como consecuencia del auge del proceso industrial y la consiguiente oferta laboral. A su vez, la disminución del trabajo en áreas rurales también provocó dicha migración interna. La población se asentaba rápidamente alrededor de los centros urbanos más importantes del país, y sin ninguna planificación, crecían los barrios obreros en zonas contaminadas e inundables, es decir, no propicias para la construcción de viviendas. La falta de previsión del crecimiento acelerado de la población urbana trajo como consecuencia la formación de barrios en sitios inapropiados, con consecuencias como el hacinamiento, la proliferación de enfermedades, la falta de servicios, etc.

El proceso industrial continuó su marcha con el desarrollismo de Frondizi (1958-1962) luego con Illia (1963-1966) y con gobiernos de facto, que, más allá de su condición neoliberal, no alteraron demasiado el curso de la industria nacional. Sin embargo, la convulsionada situación política de los '70 dio a los militares y a los grupos financieros que los solventaban la *excusa* para hacerse con el poder de la Argentina mediante un golpe de Estado. El "Proceso de Reorganización Nacional", así llamado por los militares, no sólo instauró en el país la cultura del miedo a través del terrorismo de Estado, sino que además favoreció los intereses de los sectores financieros internacionales, desmantelando la industria nacional.

El gobierno militar de Videla, Massera y Agosti impuso el neoliberalismo a rajatabla, abriendo el mercado nacional merced a la reducción de aranceles de importaciones: evidentemente, la industria argentina no podía competir con los mercados internacionales por razones coyunturales, es decir, el tamaño de la producción argentina generaba un costo de los productos mucho más alto que el de los grandes mercados internacionales, por lo tanto el precio de los productos nacionales era muy superior al de los productos importados.

La industria, desprotegida y abandonada, se vio obligada a cerrar las puertas de las fábricas despidiendo a miles de empleados, aumentando así la tasa de desempleo del 5% al 9%. Los obreros de los barrios próximos a los conglomerados urbanos se quedaron sin trabajo. Los barrios, precariamente construidos, fueron transformándose en villas de emergencia, acogiendo en sus viviendas a grandes masas de excluidos. Por otra parte, el rol social del Estado se vio disminuido por las ideas neoliberales que azotaban al país por lo tanto los habitantes de las villas no obtuvieron ninguna ayuda por parte del estado. Como consecuencia de esto, la cantidad de habitantes de las villas creció mucho. El porcentaje de hogares pobres pasó del 5,8% en 1974 a 12,8% en 1980.

La realidad de la Argentina era cada vez más cruel para más gente, a costa de la apertura de los mercados. Durante el gobierno de Alfonsín, el Estado volvió a estar presente en la actividad económica, sin embargo el gobierno radical no pudo hacerle frente a la crisis inflacionaria y los mercados mundiales, íntimamente relacionados a la caída de la URSS, presionaron para la salida del gobierno de Alfonsín para así instaurar nuevamente el neoliberalismo en la Argentina. Pero esta vez sería peor. El neoliberalismo, con la URSS extinguida, tenía el camino libre para apropiarse del tercer mundo. Ya en 1991, antes de la llegada de Menem al poder, sólo el 30% de los hogares del conurbano bonaerense poseían una adecuada infraestructura urbana, lo que concierne a alumbrado público, desagüe pluvial, red de agua potable y red cloacal.

El gobierno de Carlos Menem fue una profundización del neoliberalismo: las empresas públicas fueron vendidas a capitales privados, la convertibilidad "1 dólar = 1 peso" perjudicó

terriblemente a la escasa industria nacional que quedaba. La población obrera que quedaba y otros sectores sociales medios bajos perdieron su trabajo y, paradójicamente, fueron incluidos dentro del grupo de los excluidos. La nula planificación urbana del Estado más el aumento de la población por debajo de la línea de pobreza contribuyó a la proliferación de villas de emergencia en todo el país. Esto sumado a la total ausencia del Estado en materia social y laboral lo que produjo, como ya dijimos el crecimiento acelerado de la población que habita en las villas de emergencia.

Para mostrar un ejemplo de este crecimiento acelerado de la población de las villas de emergencia, mostraremos un gráfico de la Capital Federal, el distrito más rico del país:



Fuente: Clarín

Para ejemplificar lo mencionado anteriormente, se puede tomar el caso de la Villa 31 y la 31 bis, ubicadas en Retiro, a partir de un artículo publicado en *La Nación* el 30/9/01. Allí, en primer lugar se destaca el impresionante crecimiento que tuvieron estas villas de emergencia, puesto que en 1998 eran 9442 los habitantes, mientras que en 2001 aumentó hasta los 13.290 habitantes, es decir un aumento de aproximadamente 40% en 3 años (según los censos realizados en las villas). Los vecinos de esta villa atribuyen este crecimiento acelerado a que las personas que vivían en Fuerte Apache debieron abandonar ese lugar luego de que fuera demolido. Por otra parte, dan testimonio de que, además de la situación marginal en la que viven, deben soportar un clima de violencia debido a la rivalidad que existe entre los habitantes de la Villa 31 y la 31 bis.

Según lo publicado, hubo varios intentos por parte del gobierno municipal de mejorar la calidad de vida en este lugar, tales como provisión de elementos para construir cloacas y desagües, así como la puesta en marcha de un plan de reurbanización y otorgamiento de viviendas.

AÑO	PRESIDENTE DE LA NACION	PARTIDO DE GOBIERNO	MONTO DEUDA EXTERNA (millones dólares)	% AUMENTO DE LA DEUDA EN EL PERIODO DE GOBIERNO	OBSERVACIONES

1966	Onganía	MILITAR de facto	3.276	+ 46%		
1967			3.240			
1968			3.395			
1969			3.970			
1970			Levingston			4.765
1971			Lanusse			4.800
1972						4.800
1973	Cámpora/Perón	PERONISTA	4.890	+ 62%		
1974	-Perón -		5.000			
1975	Martínez de Perón		7.800			
1976	Videla	MILITAR de facto	9.700	+ 364%	El mundo vive en la era de los petrodólares, los bancos internacionales ofrecen créditos fáciles a tasas bajas. Comienza el gran endeudamiento del Estado argentino. A partir de 1980 se produce un viraje en la economía mundial. El crédito se vuelve escaso y caro.	
1977			11.700			
1978			13.600			
1979			19.000			
1980			27.200			
1981			Galtieri			35.700
1982	43.600					
1983	Bignone	45.100				
1984	Alfonsín	UNION CIVICA RADICAL	46.200	+ 44%		
1985			49.300			
1986			52.500			
1987			58.500			
1988			58.700			
1989			65.300			
1990	Menem	JUSTICIALISTA	62.200	+ 123%	En 1992, el ministro Cavallo renegocia la deuda externa y logra ciertas postergaciones de las fechas de pagos y algunas deducciones de montos. En éste período se producen las privatizaciones de las empresas del estado y la estatización de la deuda privada.	
1991			61.334			
1992			62.586			
1993			72.209			
1994			85.656			
1995			98.547			
1996			109.756			
1997			124.832			
1998			140.884			
1999			146.219			
2000	De la Rúa	ALIANZA	147.667	+ 9%		

La deuda externa argentina es uno de los grandes problemas económicos que afectan a nuestro país. Se debate si hay que pagarla o no, pero para ello es necesario conocer el origen de la deuda y los acreedores de la misma.

Como es sabido, Raúl Alfonsín asumió el cargo de presidente electo de la Nación el 10 de Diciembre de 1983 y se encontró con un país endeudado con los organismos financieros internacionales y con una industria desarticulada. El rumbo económico del gobierno radical estuvo

marcado por la presencia del Estado en la economía y la sociedad del país, creando un Plan Alimentario Nacional, aumentando las retenciones a las exportaciones y devaluando el peso, por ejemplo.

Con la llegada del ministro de Economía Sorrouille, se implementó el Plan Austral: el austral nueva moneda, reemplazaría al peso estableciéndose un tipo de cambio de 1 austral = 1000 pesos. Además, se congelarían los precios, las tarifas y los salarios y el Estado se comprometía a no sanear el déficit fiscal con emisión de moneda. Los aparentes éxitos del plan, como la reducción de la inflación dejaron entrever que el país esquivaría la crisis económica dejada por los militares. Sin embargo, el trasfondo de este plan era crear un clima de tranquilidad en la sociedad para luego aplicar medidas de ajuste. El Estado no emitía moneda para frenar la inflación pero el sostenimiento del Plan Austral exigía mucho dinero por lo tanto el gobierno se endeudaba más y más: entre 1985 y 1988 la deuda aumentó 9400 millones de dólares.

El fracaso del Plan Austral provocaría que el gobierno de turno implementara un recorte salarial y, la hiperinflación, sumada a la pérdida de valor del austral, generaron deudas en el Estado que buscaba sanear de cualquier modo la economía. El esfuerzo no dio sus frutos y el gobierno de Alfonsín dejó en manos del poder financiero el control político del país. Con el arribo de Menem al poder, la convertibilidad impuesta por el ministro Cavallo requería que el Estado gastara divisas para mantener la paridad puramente nominal de 1 peso = 1 dólar. Como no se fomentaron las actividades productivas el Estado no generaba ingresos por lo tanto las reservas gastadas en la política monetaria no se recomponían. Eso, sumado a la privatización de las empresas estatales, cuyos compradores aprovecharon el 1 a 1 para obtener más divisas y depositarlas en el exterior, generó una mayor dependencia con el capital extranjero. La deuda externa, durante el período 1990-1999, aumentó su cifra sideralmente: de 61.000 millones a 146.000 millones de dólares.

Para solventar la convertibilidad, que a su vez destruía la industria nacional y promovía el endeudamiento del Estado con acreedores extranjeros, era necesario pedir créditos a los organismos multilaterales, el FMI, el BID, el Banco Mundial, quienes accedieron a la petición de los créditos a cambio de tasas de interés altísimas y la aplicación cada vez más profunda de medidas de ajuste social. El país contrajo deudas con los organismos de crédito internacionales ya mencionados y con acreedores privados, tenedores de bonos de la deuda.

El gobierno de la Alianza asumió con la promesa, nefasta, por cierto, de no tocar la convertibilidad. El Estado se hallaba endeudado pero aún quedaban reservas que podrían haber solventado una devaluación tranquila. Sin embargo, el consenso del gobierno con los sectores financieros provocó el endeudamiento a través del mantenimiento de la convertibilidad, con dinero obtenido de créditos del FMI. El blindaje y el megacanje de bonos no hicieron más que aumentar la deuda externa del país y su consiguiente dependencia con el poder financiero y especulativo internacional.

Más allá de la dependencia del país, la deuda externa sumergió al Estado en un proceso de profunda quiebra económica que hace difícil la reconstrucción del país. Tal vez una de las más graves consecuencias fue que el Estado no sólo le debía al Fondo, al BID y al Banco Mundial. También le debía a 700.000 acreedores privados, con quien era más difícil negociar, 76.700 millones de dólares.

En materia social, el desempleo se hallaba por encima del 20%. Luego de la renuncia de José Luis Machinea, fue nombrado como ministro de economía a Ricardo López Murphy, quien por presentar proyectos que representaban un giro a la derecha incluso más extremo que los presentados por el gobierno de la alianza, duró apenas dos semanas en su cargo. Dentro de ellas, realizar un importante ajuste del gasto público disminuyendo los fondos a áreas de gran importancia social tales como salud o educación.

A continuación, el ex funcionario menemista Domingo Caballo fue nombrado en reemplazo. Sus medidas conllevaban la cesación de pagos a la deuda externa, lo que generó gran desconfianza en el sector financiero nacional y resultó en un importante retiro de fondos bancarios. Para evitar la continuación de estas acciones que provocarían la quiebra de numerosos bancos, el estado intervino a favor de aquellos congelando los depósitos, lo que más tarde sería conocido como el corralito.

Esta situación de crisis que afectaba a la grandes mayorías del país generó una importante reacción popular, incluyendo marchas pacíficas, cacerolazos, huelgas y saqueos, que presionó contundentemente al gobierno de turno y determinó la renuncia del presidente y el final de su partido.